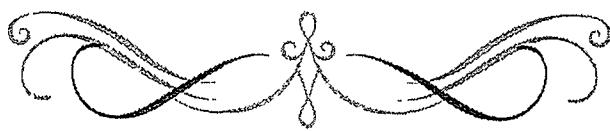


ARGENTINA



COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER 57° Sesión

Intervención de la Embajadora Gloria BENDER

*Representante Especial para temas de la Mujer en el Ámbito Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina*

Nueva York, 7 de marzo de 2013
Sírvase verificar durante lectura

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN

57° session

Statement by Ambassador Gloria BENDER

*International Special Representative on Women issues of the Ministry of Foreign
Affairs and Worship of the Argentine Republic*

New York, March 7th 2013
Please check against delivery



Misión Permanente de la
República Argentina
Naciones Unidas

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

ARGENTINA

57º Sesión Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

New York, 4 al 15 de marzo de 2013

“Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”

Sra. Presidenta,

Una vez más la República Argentina se complace en ser parte de este prestigioso foro. En esta ocasión, nos reunimos con el objeto de reflexionar y compartir experiencias relativas a la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Nuestro país quiere destacar la importancia que representa la elección de este tema como prioridad en la agenda internacional y confía en poder alcanzar acuerdos operativos que nos permitan seguir avanzando en líneas de acción conjuntas.

En los últimos años la Argentina viene profundizando un modelo de crecimiento con inclusión social, llevando adelante una serie de políticas públicas orientadas a la ampliación de derechos y de igualdad, con eje en el pleno e irrestricto respeto de los derechos humanos. En ese marco de protección y promoción de los derechos, destacamos muy especialmente la implementación de la **Asignación Universal por Hijo** —que protege los derechos de niños y niñas mediante un subsidio a sus adultos cuidadores—, la sanción de la **ley de matrimonio igualitario** —que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo— y la **ley de identidad de género** —que dispone que a cualquier persona mayor de 18 años le asiste el derecho al reconocimiento de su identidad sexual más allá del sexo biológico con el que hubiere nacido y habilita la rectificación de sus datos registrales—.

Es precisamente desde una perspectiva de derechos humanos que nuestro país asume la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. Asimismo, la República Argentina comparte el punto de vista del Secretario General de la Organización en cuanto a la necesidad de contar con un enfoque sistemático y holístico para prevenir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas que incluya medidas legislativas y normativas, la protección de las sobrevivientes y la recopilación e investigación de datos. Con ese propósito venimos implementando un amplio abanico de acciones y medidas entre las que destacamos:

Normativa en materia de prevención y sanción de la violencia

Nuestro país ha adherido a la normativa internacional en materia de prevención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas, dentro de la que destacamos la **ley 23.179** de ratificación de la **Convención sobre la Eliminación de todas las Formas De Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)**, que cuenta además con rango constitucional. El Protocolo Facultativo de la CEDAW fue ratificado en el año 2006. Desde su incorporación como Estado Parte de esta Convención, nuestro país ha presentado ya seis informes periódicos ante el **Comité CEDAW**.

A nivel regional, la Argentina ha ratificado la “**Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres**” (**Convención de Belem do Pará**) que entiende por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta Convención distingue tipos de violencia contra la mujer, incluyendo la física, sexual y psicológica.

En ese marco, en el año 2009 se sancionó la **Ley 26.485** de “**Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales**” que supera la normativa nacional en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres hasta entonces vigente en tanto amplía la definición de violencia introduciendo una serie de tipos (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica) y de modalidades (doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática). Asimismo, establece que el Consejo Nacional de las Mujeres —mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres— sea el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley, la forma de abordaje y la puesta en marcha de un Plan de Acción Integral y de un Observatorio de Género, como instrumentos capaces de dar una respuesta concreta a una problemática tan compleja.

En la actualidad, se encuentra en funciones la **Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG)** que apunta a elaborar las sanciones para los perpetradores así como realiza tareas de sensibilización en distintas jurisdicciones del país destinadas a funcionarios judiciales y personal de seguridad.

Por otra parte, una de las formas más aberrantes de la violencia la constituye la trata de personas. Nuestro país cuenta desde el año 2008 con la **Ley 26.364 de Prevención y sanción**

de la trata de personas y asistencia a sus víctimas que fuera reformada a fines de 2012 en los siguientes aspectos:

- Sobre el consentimiento de la víctima: "...no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores."
- Aumenta las penas a los implicados en trata de personas y amplía la protección de las víctimas.
- Condena el proxenetismo con penas de entre 2 y 4 años de prisión y de 5 a 15 años en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores.

Asimismo, crea organismos específicos para la asistencia y la reparación no monetaria del daño a las víctimas a partir del establecimiento de mecanismos adecuados para el alojamiento, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal. Por otro lado, crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete con el fin de constituir un espacio permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de este tema. Entre otras tareas, el Consejo deberá diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir el delito de trata y a proteger y asistir a las víctimas y sus familias. También instituye un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas, integrado por representantes de los ministerios nacionales de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo.

En este mismo sentido, se destaca la firma del **Decreto 936/11** cuyo objetivo principal es prohibir la publicación de avisos de servicios sexuales en los medios gráficos y terminar con uno de los eslabones que se alimentan de la industria de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. Asimismo, promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

El artículo 1º comprende la prohibición de avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícitamente referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, abarcando todos aquellos avisos cuyo texto resulte engañoso.

El decreto establece la creación de la Oficina de Monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual que coordina su actuación con el Consejo Nacional de las Mujeres, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del Consejo Nacional de las Mujeres, se creó un área interna a fin de articular acciones con los organismos involucrados y facultados para el efectivo cumplimiento del decreto 936/2011.

Por otro lado, en 2005 fue promulgada la **Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”** cuyo objetivo es garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Argentina es parte.

En noviembre pasado se incorporó al femicidio como agravante de la figura de homicidio en el Código Penal por lo cual podían recibir reclusión perpetua quienes comentan femicidio en el entendido de que es un tipo agravado de homicidio en el que se descarta el uso de atenuantes por razones de “emoción violenta”. También se impone perpetua al que mate “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se mantuvo relación” —denominado “femicidio vinculado”— como es el caso de los hombres que han asesinado a hijos de su mujer o ex mujer. Asimismo, el artículo 80 del Código Penal establece expresamente prisión perpetua al hombre que “matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género”.

También en el Código Penal, mediante la ley 26.738, se derogó el Artículo 132 que preveía la figura del avenimiento, por la cual un violador o responsable de abuso sexual podía eludir la cárcel si era perdonado por su víctima al contraer matrimonio.

Por otra parte, se destaca por su implicancia en la construcción de relaciones más equitativas entre mujeres y varones —puntapié necesario para la eliminación de la violencia de género— la puesta en funcionamiento de la **Ley 26.522 de “Servicios de Comunicación Audiovisual”**. Dicha ley incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación a lo largo de todo su texto. Esta pieza normativa apunta explícitamente a promover imágenes equilibradas y variadas de hombres y mujeres en los medios de comunicación, así como a considerar la diversidad cultural, lingüística y las identidades locales. En ese marco, se señala que uno de sus objetivos es la protección de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Asimismo, se establece la responsabilidad de

los productores, distribuidores y emisores de programas y/o publicidad, de velar por el respeto de una serie de leyes nacionales, entre la cuales incluye la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Por último, queremos destacar que la Argentina se encuentra en proceso de aprobación del **Plan Nacional de Implementación de la Resolución 1325** del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fuera consensuado por diferentes ministerios del Poder Ejecutivo Nacional en consulta con organizaciones de la sociedad civil. Dicho Plan pretende cumplir con las necesidades planteadas por la Res.1325 y sus complementarias, en especial la Resolución 1820 sobre prevención y eliminación de la violencia sexual en conflictos armados.

Servicios y respuestas multisectoriales para las mujeres y niñas víctimas de violencia

Asistencia en la emergencia

El programa “**Las Víctimas contra las Violencias**”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dispone de brigadas móviles para acudir al auxilio ante un llamado de emergencia para trasladar a las víctimas desde el lugar en el que se encuentran hacia un lugar seguro. El **número telefónico gratuito** para emergencias en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con funcionamiento las 24 horas, es el **137**. Cabe destacar que es inminente el lanzamiento de la **línea 144**, de idénticas características, a nivel nacional. A la fecha, para todo el territorio nacional existe otra línea gratuita (0800-222-3425) de atención, asesoramiento y derivación a distintos centros locales según la problemática de que se trate, como parte del Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de la Nación. En el caso de violencia, los llamados son derivados al **Consejo Nacional de las Mujeres** que cuenta con un equipo especializado para consultas y asesoramiento.

El **Ministerio del Seguridad**, mediante resolución 83/2012 dispuso el **asesoramiento y derivación correspondiente a víctimas de violencia sexual y/o familiar en cada comisaría de la policía federal**.

Recientemente se ha implementado un **protocolo de actuación para las fuerzas federales ante casos de violencia sexual**. Regula la articulación del trabajo de quienes integran las fuerzas policiales y de seguridad, con las instancias de atención a víctimas disponibles dentro del Ministerio de Justicia, como la Brigada de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Este

trabajo coordinado constituye un ejemplo de buenas prácticas en la respuesta multisectorial a las víctimas ya que permite evitar tanto la revictimización, como la pérdida de material probatorio útil para la instancia judicial, poniendo a disposición de la víctima de violencia sexual asistencia especializada que la acompañará y guiará durante todo el proceso de denuncia y extracción de pruebas, así como para la obtención de atención médica apropiada.

Mediante Resolución 74/2011 se asigna a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el **número telefónico 145** para la atención de comunicaciones realizadas por los ciudadanos damnificados por el delito de trata, en el ámbito de la República Argentina. Esta línea permite la atención de las víctimas por parte de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que acompañan a las víctimas desde el rescate o su escape del lugar de explotación.

Asistencia jurídica

El **Ministerio Público de la Defensa** brinda desde octubre pasado **patrocinio jurídico gratuito** a víctimas de violencia de género, sumándose a los otros servicios que ya se venían implementando para facilitar el acceso a la justicia, tal y como la **Oficina de Violencia Doméstica** (OVD), dependiente de la **Corte Suprema de Justicia de la Nación**, con funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2008.

El **Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género**, creado en el ámbito de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, tiene como objetivo brindar patrocinio jurídico gratuito y asistencia legal general a víctimas de violencia de género, en casos que sean de competencia de la Justicia Nacional o Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, a través de diversas resoluciones de la **Procuración General de la Nación** se dispuso:

- Recomendar a los Sres. Fiscales que en aquellos casos en los que les sea comunicada la comisión de un delito contra la integridad sexual en el que hubiera tenido lugar alguna forma de acceso carnal y hubiera acaecido recientemente, instruyan a la víctima sobre la conveniencia de recibir asistencia médica inmediata (Res. PGN 126/04).

- Instruir a los Sres. Fiscales con competencia penal a cargo de las distintas dependencias fiscales de todo el país para que incorporen, como reglas prácticas para tener en cuenta en la atención de víctimas y testigos, el documento denominado "Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos", aprobado por la XVI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, realizada el 9 y 10 de julio de 2008 (Res. PGN 174/2008).

- Instrumentar la puesta en funcionamiento en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de una Cámara Gesell para la recepción de testimonios de niños y niñas víctimas de delitos (Res. PGN 8/2009)

- Adherir a las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana e instruir a los señores fiscales, funcionarios y empleados de las distintas dependencias fiscales de todo el país, para que incorporen las Reglas como prácticas en la atención de personas en condición de vulnerabilidad (Res. PGN 58/2009).

- Ordenar que en todos los procesos que involucren como víctimas o testigos a menores de 18 años, se proceda del modo regulado en el artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación (con intervención de un psicólogo/a especialista en niños, en un ámbito especializado), se disponga la filmación de la entrevista con la víctima y se proceda a notificar al imputado y a su defensa la realización de dicho acto;

- Instruir a los Sres. Fiscales para que, en todos los procesos en los que se investigue la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual de menores de 18 años de edad, se notifique al imputado y a su defensa la realización de peritajes sobre las víctimas; y para que, en aquellos procesos en los que aún no exista un imputado identificado, se realicen las entrevistas y los peritajes en relación con niñas y niños víctimas con control judicial y notificación a la Defensa Pública Oficial. (Res. PGN 59/09)

Otros servicios jurídicos gratuitos alternativos incluyen consultorios jurídicos en universidades nacionales y consejos profesionales así como la implementación, en varias provincias, de sistemas de **justicia itinerante** para recorrer grandes distancias tratando de acercar la justicia a la comunidad, lo que beneficia a las mujeres rurales e indígenas que viven en comunidades alejadas de las grandes urbes.

Asimismo, mediante convenio firmado entre el Consejo Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Derechos Humanos de la

Nación, se establece la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de ser querellante de oficio (mediante una evaluación previa) ante la muerte dolosa de una mujer, a manos de su pareja u otra persona perteneciente al núcleo familiar. También lo hará, en casos en los que se corrobore que la vida de la mujer corre peligro.

Refugios

Nuestro país cuenta con refugios para mujeres víctimas de violencia que funcionan a nivel provincial (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y a nivel municipal, destinados a cubrir la demanda específica de cada jurisdicción. Estos refugios están abiertos para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos hasta la edad de 18 años, en el caso de los varones.

Capacitaciones y sensibilizaciones

En el ámbito del Poder Ejecutivo, los **Ministerios de Seguridad, Defensa, Educación, Interior, Trabajo, Relaciones Exteriores, Justicia y Desarrollo Social** cuentan con capacitaciones y sensibilizaciones periódicas en materia de violencia contra las mujeres en relación a las tareas específicas de cada cartera. En muchos casos, las acciones de capacitación se realizan en articulación con el Consejo Nacional de las Mujeres y otros actores que resulten relevantes.

Asimismo, el Poder Judicial a través de la **Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación** capacita a jueces y operadores de justicia para una eficiente aplicación de la ley e interpretación de la jurisprudencia. Esta oficina desarrolla una serie de talleres destinados a instalar el enfoque de equidad de género en los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Este enfoque contribuye a construir relaciones de equidad entre mujeres y varones, tanto en el ámbito público como en el privado.

A fines del año 2012 se creó un **espacio interinstitucional de las áreas de género del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial** a fin de relevar acciones con el objeto de crear sinergias y evitar superposiciones. A partir de ese espacio, fue posible la realización de talleres de capacitación entre los actores institucionales involucrados.

En el **Programa “Conectar Igualdad”** —iniciativa que busca reducir la brecha digital, educativa y social a partir de la distribución de netbooks entre alumnos y docentes de escuelas públicas secundarias de todo el país— se creó un módulo relativo a la lucha contra la trata de

personas, a partir del trabajo conjunto de los Ministerios de Justicia y de Educación de la Nación.

Por último, se realizan acciones desde la sociedad civil con apoyo gubernamental, dentro de las que podemos destacar la campaña "**Sacá tarjeta roja al maltratador**" que, mediante la incorporación de figuras mediáticas, apunta a darle visibilidad a la violencia sufrida por mujeres y niñas con el fin de lograr su condena social, con especial énfasis en el compromiso por parte de los varones. De ahí que los spots publicitarios se difundan, entre otros espacios, en las tandas de la transmisión televisiva de los partidos de fútbol, deporte de enorme popularidad en nuestro país.

Ciudades seguras

El programa **Ciudades sin violencia hacia las Mujeres, Ciudades Seguras para tod@s** se encuentra en ejecución en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y culminó en diciembre de 2011 en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires. Dicho Programa se propone entre sus objetivos principales: la ampliación, conocimiento y fortalecimiento del debate público sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades; la inserción del tema de la violencia de género en la agenda social y en las políticas públicas; el empoderamiento de las mujeres en el derecho al uso y disfrute de la ciudad y en los espacios de decisión de políticas públicas; y la demostración y replicación de experiencias de intervención participativas de uso de la ciudad y de barrios con mayor seguridad para las mujeres.

Violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos

La República Argentina entiende que también es una forma de violencia aquella que cercena la libertad reproductiva de las mujeres e impide el ejercicio de sus derechos en relación con el número de embarazos y/o el intervalo intergenésico que decidan, de manera informada, libre y responsable. Es por ello que en el año 2003 fue creado el **Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable**, por ley 25.673, con alcance nacional y la misión de promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva.

El Programa se propone los siguientes objetivos:

- Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia.
- Disminuir la morbimortalidad materno infantil.
- Prevenir embarazos no deseados.
- Promover la salud sexual de las y los adolescentes.
- Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales y mamarias.
- Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
- Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

Medición de la violencia

Mediante la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se diseñará un conjunto de indicadores a fin de establecer un **Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer** que tendrá por resultado las primeras estadísticas a nivel nacional. Con ese objetivo, el INDEC acordó articular con las jurisdicciones provinciales pertinentes el aporte de la información de sus registros. La creación de este sistema nacional de información contribuirá al diseño de políticas públicas más eficaces, orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Sefiora Presidenta,

Somos conscientes de que las mujeres enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, algunos de ellos originados en la existencia y persistencia de patrones socioculturales discriminatorios que impiden y obstruyen la aplicación efectiva de las leyes destinadas a su protección. De ahí que resulte necesario sostener y profundizar aquellas medidas específicas que propician la equidad de género en el acceso a la justicia. Asimismo, apostamos al trabajo intersectorial e interinstitucional como herramienta para la creación de sinergias que permitan la detección

temprana y la atención integral de las víctimas así como su recuperación y reinserción en la vida social. Finalmente, creemos fundamental que el rechazo a cualquier forma de violencia hacia mujeres y niñas cuente no sólo con el firme compromiso de los gobiernos sino también con el de las más diversas organizaciones sociales y de la sociedad argentina en su conjunto.

Con esa firme convicción, el Estado Argentino, mediante el Consejo Nacional de las Mujeres asume como **compromisos políticos para su gestión del año 2013 el desarrollo de la asistencia y protección a las víctimas, el fortalecimiento institucional para la prevención de situaciones de violencia y la elaboración de estadística y producción de información en la materia.**

Del mismo modo y como expusimos, si bien existen múltiples mecanismos en distintas áreas de los poderes ejecutivo y judicial, a nivel nacional y local que trabajan en la prevención y la asistencia a las víctimas de violencia de género, la puesta en marcha del **Plan Nacional** —previsto por la Ley 26.485— posibilitará un abordaje más integral del complejo fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas que constituye no sólo una grave forma de discriminación sino también una clara violación de derechos humanos.

Muchas gracias.

Argentina

Fifty-seventh session Commission the condition legal and of women

New York, 4 March 15, 2013

"Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls"

Madam President,

Once more the Argentina Republic is pleased to be part of this prestigious forum. On this occasion, we meet to reflect and share experiences relating to the elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Our country wants to stress the importance of the choice of this subject as a priority on the international agenda and hopes to reach operational agreements that will allow us to move forward in joint lines of action.

In recent years Argentina is developing a model of growth with social inclusion, carrying out a series of public policies aimed at the expansion of rights and equality, with axis in full and unrestricted respect for human rights. In this context of protection and promotion of the rights, particularly highlight the implementation of the **Universal Allowance for Child** - which protects the rights of children through a subsidy to their adult caregivers-sanction of the **law of marriage equal** - enabling same-sex marriage - and the **law of gender identity** - which provides that attends any person older than 18 years the right to recognition of their sexual identity Apart from the biological sex that has been born and enabled the rectification of their registration data.

Is precisely from a human rights perspective that our country takes the fight against all forms of violence against women and girls. Also, the Republic Argentina of the Secretary General of the organization shares point of view on the need for a systematic and holistic approach to prevent all forms of violence against women and girls which include legislative and regulatory measures, the protection of survivors and the collection and investigation of data. For this purpose we have been implementing a wide range of actions and measures, among which we highlight:

Legislation on prevention and punishment of violence

Our country has acceded to the international regulations on the prevention and punishment of violence against women and girls, among which we highlight the ratification of the **Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)**, which also has constitutional rank. The Optional Protocol to the CEDAW was ratified in 2006. Since its incorporation as a State party to this Convention, our country has already submitted six periodic reports before the **Committee CEDAW**.

At the regional level, Argentina has ratified the "Inter-American Convention to prevent, sanction and eradicate violence against women" (Convention of Belém do Pará) violence against women which means any act or conduct, based on gender, which causes death, injury or physical, sexual or psychological suffering both in public and in private. This Convention differentiates types of violence against women, including physical, sexual and psychological.

In this context, in the year 2009 was enacted law 26.485 "Integral protection to prevent, punish and eradicate violence against women in the areas that develop their interpersonal relationships" that exceeds hitherto existing national rules in the fight against violence against women insofar as it extends the definition of violence by introducing a series of types (physical, psychological, sexual, economic and patrimonial and symbolic) and methods (household, institutional, labour, obstetric and media). Also States that the National Council for women --national mechanism for the advancement of women - is the governing body responsible for the design of public policies to make the provisions of the Act, the form of approach and the implementation of a Plan of Integral Action and an Observatory of gender as instruments capable of responding concrete to a very complex problem.

Currently, Some functions the **Commission national Coordinator of actions for the development of sanctions for violence against women (CONSAVIG)** that points to develop sanctions for perpetrators as well as performs tasks of awareness in different jurisdictions in the country aimed at judicial officials and security personnel.

On the other hand, trafficking in persons is one of the most aberrant forms of violence. Our country has since 2008 with the **law 26.364 of prevention and punishment of trafficking in persons and assistance to its victims** that was restored at the end of 2012 in the following aspects:

- On the consent of the victim: "... shall constitute no causal case of immunity from liability of the authors, partners, cooperators, or instigators."
- Increases penalties to those involved in trafficking in persons and extends the protection of victims.
- Condemns procuring with penalties between 2 and 4 years of imprisonment and 5 to 15 years in the case that the victims become pregnant or less.

Also create specific agencies for assistance and non-monetary compensation for the injury to the victims from the establishment of adequate mechanisms for the accommodation, maintenance, sufficient food and personal hygiene items. On the other hand, it creates the Federal Council for the fight against trafficking in persons and protecting and assisting victims within the scope of the Chief of staff in order to form a permanent space for action and institutional coordination to follow up this issue. Among other tasks, the Council to design performance standards, protocols and speech circuits that contribute to preventing

and combating the crime of trafficking and to protect and assist the victims and their families. It also establishes an Executive Committee for the fight against trafficking in persons and for protection and assistance to victims, comprising representatives from the ministries of security, justice, Social development and work.

In this sense, the signing of the **Decree 936/11** stands whose aim is to ban the publication of ads for sexual services in the print media and end up with one of the links that feed industry of trafficking in persons, especially women and girls. In addition, it promotes the eradication of the dissemination of messages and images that stimulate or encourage sexual exploitation.

Article 1 includes the prohibition of advertisements that promote sexual availability or make explicit or implicitly reference at the request of people intended for the sex trade, by any means, in order to prevent the crime of trafficking in persons for purposes of sexual exploitation and the gradual elimination of all forms of discrimination against women, encompassing all those announcements whose text is misleading.

The decree establishes the creation of the Office's monitoring of publication of notices of offer of sex trade which coordinates its action with the National Council of women, the Office of rescue and assistance to the people affected by the crime of trafficking of the Ministry of Justice and human rights and with the Federal service authority of Audiovisual Communication (AFSCA).

In that sense, from the Undersecretary of national coordinating unit for prevention, assistance and eradication of violence against women, the national women's Council, an internal area was created in order to articulate actions with the agencies involved and empowered for the effective enforcement of the Decree 936/2011.

On the other hand, in 2005 was promulgated the **law 26,061 "Protection of the rights of girls, boys and adolescents"** whose objective is to ensure the exercise and full, effective and permanent enjoyment of those rights recognized in the national legal system and in the international treaties to which the Argentina is a party.

In November **Femicide was included as aggravating circumstance of the figure of murder in the criminal code** which could receive imprisonment those who commit femicide in the understanding that it is an aggravated kind of homicide in which mitigating circumstances for reasons of "violent emotion" are excluded. Also imposed life imprisonment on which Matt "with the purpose of causing suffering to a person that is maintained or kept relationship" - called "linked femicide" - as in the case of men who have murdered children of his wife or ex-wife. Moreover, article 80 of the Criminal Code expressly imprisonment to the man that "he kills a woman, or a person who self identifies with feminine gender identity and without gender violence".

Also in the criminal code, the Act 26.738, **was repealed the Article 132** which provided the figure of "avenimiento", by which a rapist or responsible for sexual abuse could escape jail if he was pardoned by his victim marriage.

On the other hand, the law "**Audiovisual Communication Services**" **26.522**, stands out for its implication on the construction of more equitable relations between women and men - needed kick-off for the Elimination of gender-based violence--. This law incorporates the gender perspective and the principle of non-discrimination throughout all its text. This piece of legislation explicitly aims to promote balanced and varied images for men and women in the media, as well as to consider the cultural, linguistic diversity and local identities. This framework, States that one of its objectives is the protection of equality between men and women and the plural, equal treatment and non-stereotyped, avoiding any discrimination because of gender or sexual orientation. Also establishes the responsibility of producers, distributors and issuers of programs and/or advertising, ensuring the respect of a number of national laws, among which includes the 26.485 law of integral protection to prevent, punish and eradicate violence against women in the areas that develop their interpersonal relationships.

Finally, we highlight that the Argentina is in the process of approval of the **National Plan for implementation of resolution 1325** of the UN Security Council, that it was agreed upon by different ministries of the Executive branch in consultation with civil society organizations. The Plan aims to meet the needs posed by the Res.1325 and their complementary, especially resolution 1820 on the prevention and elimination of sexual violence in armed conflict.

Services and multisectoral responses to women and girls victims of violence

Assistance in emergency

The program "**the victims against violence**", under the Ministry of Justice and human rights of the nation, has mobile teams to attend to a call for emergency assistance to move victims from the place at which a safe direction. The **toll-free telephone number** for emergencies in the area of the city of Buenos Aires, with 24-hour operation, it is **137**. Note that the launch of the line is imminent **144**, with identical characteristics, at the national level. To date, for the entire national territory there is another hotline (0800-222-3425) attention, advice and referral to local centres according to the problem concerned, as part of the national programme for the promotion and strengthening access to justice, the Ministry of Justice of the nation. In the case of violence, calls are referred to the **National Council of women** has a team for consultations and advice.

The **Ministry of security**, by decision 83/2012 ordered the **advice and referral to victims of sexual or family violence in each federal police station**.

We have recently implemented a **Protocol for cases of sexual violence against federal forces**. Regulates the articulation of the work of those who integrate the police and security forces with instances of assistance to victims available within the MOJ, as the Brigade of attention to victims of Sexual violence. This coordinated effort is an example of best practices in multi-sectoral response to victims by making it possible to avoid both the victimized and the loss of evidentiary material for the Court, making available to the victim of sexual violence expert assistance that will accompany it and guide you during the entire process of denunciation and removal of evidence, as well as to obtain appropriate medical care.

By resolution 74/2011 is assigned to the Office of rescue and support people affected by the crime of trafficking of the Ministry of Justice and human rights, the **phone number 145** for the attention of communications made by the citizens affected by the offence of trafficking, within the scope of the Argentina Republic. This line allows the attention of victims by psychologists, lawyers and social workers, who accompany victims from rescue or his escape from the place of exploitation.

Legal assistance

The **Public Ministry of Defense** provides since last October **free legal representation** to victims of gender-based violence, in addition to other services were implemented to facilitate access to justice, as the **Office of domestic violence (OVD)**, dependent of the **Supreme Court of Justice of the nation**, with functioning 24 hours a day, every day of the year, in the area of the city of Buenos Aires, since 2008.

The **pilot project for victims of gender-based violence free legal representation and assistance**, created in the scope of the Commission on issues of gender of the Ombudsman General of the nation, it is intended to provide free legal representation and general legal assistance to victims of gender-based violence, in cases which are of competence of national justice or Federal of the autonomous city of Buenos Aires.

On the other hand, through various resolutions of the **power of Attorney General of the nation** became available:

-Recommending to Prosecutors that, in those cases in which the Commission of an offence against sexual integrity that had taken place some form of carnal access and had that took place recently, is communicated, instruct the victim about the convenience of immediate medical assistance (Res. PGN 126/04).

-Instruction to Prosecutors s with criminal jurisdiction in charge of the various units of the tax across the country so that they incorporate, as practical rules to take account in the care of victims and witnesses, the document called "Santiago guides on protection of victims and witnesses", adopted by the 16th Assembly General of the American Association of public prosecutors, held on 9 and 10 July 2008 (Res. PGN 174/2008).

- Implement the commissioning in the field of the public prosecutor of a Gesell Chamber to receive testimonies from children and victims of crimes (Res. PGN 8/2009)
- Join the "Brasilia rules on access to justice for the people in condition of vulnerability", approved by the plenary Assembly of the 14th edition of the Judicial Summit Ibero-American and instruct prosecutors Lords, officials and employees of the various tax around the country units, to incorporate the rules as practices in the care of people in condition of vulnerability (Res. PGN 58/2009).
- Order in all processes that involve as victims or witnesses to under 18s, proceed in the manner regulated in article 250 bis of the code procedural criminal of the nation (with intervention of a psychologist specializing in children, in a specialized field), provided the filming of the interview with the victim and proceed to notify the accused and their defense the realization of such an act;
- Instruct the Prosecutors to, in all processes in which to investigate the alleged Commission of offences against the sexual integrity of children under 18 years of age, is notified to the accused and his defence the conduct of surveys on victims; and so, in those processes in which still does not exist a defendant identified, victims with judicial control and notification perform interviews and surveys with regard to children to the official public defense. (Res. PGN 59/09)

Other free legal services alternative including practices legal in national universities and professional advice as well as the implementation, in several provinces, from systems of **justice itinerant** for travel long distances trying to bring justice to the community, which benefits to rural and indigenous women living in communities away from the big cities.

Also, by agreement between the National Council of women, the National Council for social policy coordination and the Secretariat of human rights of the nation, establishes the **responsibility of the Secretariat of human rights be Prosecutor's ex officio (by a prior assessment) to fraudulent of a female death**, at the hands of her partner or other person belonging to the family. Also it will, in cases in which will verify that the woman's life is in danger.

Shelters

Our country has with **shelters for women victims of violence** who work at the provincial level (including the autonomous city of Buenos Aires) and at the municipal level, designed to meet the specific demand of each jurisdiction. These shelters are open to women victims of violence and their daughters and sons until the age of 18 years, in the case of males.

Skills and sensitivities

In the scope of the Executive Branch, the **ministries of security, defense, education, Interior, work, Foreign Affairs, justice and Social Development** include training and periodic sensitizations on violence against women in relation to the specific tasks of each portfolio. In many cases, training actions are carried out in coordination with the national women's Council and other actors who are relevant.

In addition, the judiciary through the **Office of the woman (OM) of the Court Supreme of Justice of the nation** empowers judges and judicial for an efficient application of law and interpretation of the jurisprudence. This Office develops a series of workshops designed to install the gender equity approach in the various governmental and non-governmental agencies. This approach helps build relationships of equality between women and men, both in public and in private.

At the end of the year 2012 was created a **Interinstitutional space of gender issues of the Executive power and the judiciary** in order to relieve actions in order to create synergies and avoid overlaps. From that space was possible workshops of training between the institutional actors involved.

In the program "**connect equality**" - initiative that seeks to reduce the social, educational and digital gap from the distribution of netbooks among students and teachers in public high schools around the country - was created a module relating to the fight against trafficking in persons, from the joint work of the ministries of Justice and education of the nation.

Finally, actions from civil society with government support, among which we can highlight the campaign are made '**Show a red card to the perpetrator**', through the incorporation of media figures, aiming to give visibility to the violence suffered by women and girls in order to achieve its social condemnation, with special emphasis on the commitment by the males. Hence, the commercials are disseminated, among other areas, in the batches of the telecasts of soccer matches, sport's enormous popularity in our country.

Safest cities

The program **cities without violence against women, safe cities para tod@s** is underway in the city of Rosario, province of Santa Fe and culminated in December in the town of Morón, province of Buenos Aires. This program is proposed among its main objectives: expanding, knowledge and strengthening of public debate on the safety of women in the cities; the inclusion of the issue of violence against women in the social agenda and public policies; the empowerment of women in the right to the use and enjoyment of the city and the spaces of public policy decision; and the demonstration and replication of participatory intervention experiences of use of the city and neighborhoods safer for women.

Violence against women and sexual and reproductive rights

The Republic of Argentina understands that restricting the reproductive freedom of women and prevents the exercise of their rights in relation to the number of pregnancies or birth interval that decide, informed, free and responsible manner is also a form of violence. That is why in 2003 the **National programme for Sexual Health and responsible procreation**, was created by Act 25.673, with national scope and mission of promoting equal rights, equity and social justice, as well as to help improve the structure of opportunities for access to comprehensive sexual and reproductive health care.

The programme aims at the following objectives:

- Achieve the highest level of sexual and reproductive health for the population so you can make decisions free from discrimination or violence.
- Reduce child maternal morbidity and mortality.
- To prevent unwanted pregnancies.
- Promote the sexual health of adolescents.
- Contribute to the prevention and early detection of diseases of sexual transmission, HIV/AIDS and genital and mammary pathologies.
- Guarantee the entire population access to information, guidance, methods and services related to sexual health and responsible procreation.
- Promoting women's participation in decision-making concerning their sexual health and responsible procreation.

Measurement of violence

Through the signing of a cooperation agreement between the National Council for women and the National Institute of statistics and censuses (INDEC), a set of indicators will be designed in order to establish a **Single registry of cases of violence against women** which will result the first statistics at the national level. With that goal, the INDEC agreed with relevant provincial jurisdictions to articulate the contribution of the information from its records. The creation of this national system of information will contribute to the design of more effective public policies aimed at the prevention and eradication of violence against women and girls.

Madam President,

We are aware that women face obstacles to access to justice, some of them originated in the existence and persistence of discriminatory social and cultural patterns that impede and obstruct the effective implementation of laws designed to protect. This is why it is necessary to sustain and deepen those specific measures favouring the gender equity in access to justice. We are also committed to the interinstitution as tool for the creation of synergies that

allow early detection and comprehensive care of victims as well as their recovery and reintegration into the social life. Finally, we believe fundamental that the rejection of any form of violence against women and girls not only have the firm commitment of Governments but also with the most diverse organizations social and Argentine society as a whole.

With that firm conviction, the Argentine Government, through the National Council of Women assumes as **political commitments for its management of the year 2013 the development of assistance and protection to victims, institutional strengthening for the prevention of situations of violence and the development of statistics and production of information on the subject.**

In the same way and as we mentioned, even though there are multiple mechanisms in different areas of Executive and judicial powers, at national and local levels working in prevention and assistance to victims of gender-based violence, the implementation of the **National Plan** - planned by the Law 26.485 - will enable a more comprehensive approach of the complex phenomenon of violence against women and girls which constitutes not only a serious form of discrimination but also a clear violation of human rights.

Thanks you very much.